

# El impacto social de la crisis económica de México

JEFFREY L. BORTZ

## INTRODUCCIÓN

**A**LATINOAMÉRICA no le fue bien durante los años ochenta. El crecimiento se detuvo, los precios se fueron para arriba y las deudas externas alcanzaron niveles virtualmente imposibles de pagar. Al tiempo que los gobiernos y las empresas lucharon en todas partes y a diario contra las dificultades financieras, las clases pobres, trabajadoras y medias contemplaron el colapso de sus ingresos personales. La miseria, el sufrimiento, la desnutrición, el crimen y la descomposición social se incrementaron en forma dramática. De esa manera, los traumas de la década alimentaron en todas partes la insatisfacción con respecto a los regímenes existentes, lo que condujo a la caída de los militares en Argentina, Brasil y Chile; a que los grupos revolucionarios en El Salvador, Guatemala y Perú obtuvieran apoyo, y hacia modificaciones en los sentimientos electorales en Costa Rica, Venezuela y, más recientemente, en Nicaragua.

Los latinoamericanos tuvieron buenas razones para sentirse frustrados. Los años ochenta resultaron el reverso exacto de los años setenta, durante los cuales las economías y los ingresos se elevaron aceleradamente. Mientras que en la década de 1970 el Producto Interno Bruto (PIB) per cápita real de la región se incrementó en una tasa promedio anual del 3.0%, en 1981 declinó a 1.6%, seguido por una caída del 3.5% en 1982, y del 4.7% en 1983. Esto colocó los ingresos de mediados de los años ochenta otra vez en los niveles en que habían estado al inicio de los años setenta. Aun durante la modesta recuperación de 1984-1987, el crecimiento del PIB no logró ser mayor del 1.7%, apenas la mitad del promedio de los años setenta.<sup>1</sup> Entre tanto, muchos países estuvieron al borde de un virtual colapso de circulante en lo que estallaba la inflación. En 1987, los precios se incrementaron en 85.9% en Perú, 131.3% en Argentina y 220.9% en Brasil.<sup>2</sup> Para el final de

<sup>1</sup> Economic Commission for Latin America and the Caribbean, *Statistical Yearbook for Latin America and the Caribbean 1988*, Nueva York, 1989, p. 65.

<sup>2</sup> Economic Commission for Latin America and the Caribbean, *ibid.*, p. 95.

la década, la inflación brasileña se aproximaba a un 50% mensual, mientras que los incrementos de precios en Argentina llegaron a cerca del 80% mensual.<sup>3</sup>

Las cifras excesivas de la deuda externa provocaron problemas económicos. Los préstamos del exterior ayudaron al desarrollo de los países latinoamericanos durante los años años setenta, pero cuando el crecimiento se frenó en los ochenta, los plazos para el pago comenzaron a volverse cada vez menos soportables. Para algunos países, tan sólo los pagos de los intereses se elevaron de un tercio a la mitad de los ingresos totales por exportaciones, con lo que el margen que les quedaba para realizar intercambios económicos con el exterior e importar bienes de capital y productos intermedios, era muy reducido. Para 1987, Venezuela había acumulado una deuda externa de 32 000 millones de dólares, con un PIB de sólo 48 000 millones. La deuda de Argentina se incrementó a 55 000 millones de dólares, mientras la de Brasil creció hasta la sorprendente cifra de 121 000 millones, más de un tercio del PIB.<sup>4</sup>

México no pudo escapar al deslizamiento económico general de la región. El impacto de la recesión de 1980-1982 arrasó con el país haciendo más estragos que el huracán *Hugo* en las Carolinas. En 1982, el aumento en los intereses de los préstamos del exterior y la declinación de los precios del petróleo —el principal producto de exportación— revirtieron el patrón de crecimiento imperante durante los años setenta. El PIB real per cápita cayó en un 3% en 1982 y en un 6.5% en 1983; 1984 y 1985 fueron testigos de tasas de crecimiento insignificantes; en 1986, el PIB real per cápita cayó otro 6.1%, y luego, en 1987, 0.8%.<sup>5</sup> Como en el resto de América Latina, los aumentos en los precios se agregaron a los otros problemas económicos. En 1982, la inflación alcanzó el 98.8%; subió a 105.7% en 1986, y a 159.2% en 1987.<sup>6</sup>

Una deuda externa extremadamente alta empantanó a los programadores de la política económica, cuando estaban tratando de sobrevivir a los males mellizos de la recesión y la inflación. A lo largo de los años setenta, México había pedido prestados miles de millones de dólares para financiar la producción petrolera, sólo para ver que la recesión de 1980-1982 abatía los precios internacionales del petróleo. Cuando los precios mundiales del petróleo se desplomaron, los ingresos del comercio exterior de México cayeron hasta niveles peligrosamente bajos. Pese a la merma del circulante cambiario, el país se encontró de todas maneras comprometido por el servicio de 88 000 millones de dólares de deuda externa. Cuando el gobierno admitió que México no podría cumplir con sus obligaciones financieras internacionales a fines de 1982, los acreedores comerciales fueron obligados a aceptar una renegociación en los pagos de capital e intereses. Para 1987, la renegociación de la deuda llevó el total hasta 102 000 millones de dólares.<sup>7</sup> Para el final

<sup>3</sup> *The Wall Street Journal*, 19 de diciembre de 1989, p. A10, y 16 de febrero de 1990, p. A13.

<sup>4</sup> Economic Commission for Latin America and the Caribbean, *ibid.* p. 501.

<sup>5</sup> Economic Commission for Latin America and the Caribbean, *ibid.*, p. 65.

<sup>6</sup> México, Presidencia de la República, *Las razones y las obras*, tomo VI, México, 1988, p. 899.

<sup>7</sup> Economic Commission for Latin America and the Caribbean, *ibid.* p. 501.

de la década, el servicio de la deuda le estaba costando al país más de un tercio de sus ingresos por exportaciones. Para quienes podían comprar, la deuda externa de México estaba siendo vendida por menos de la mitad de su valor nominal en el mercado secundario.<sup>8</sup>

Aunque durante los años ochenta la crisis de México había hecho erupción primero en el mundo financiero, rápidamente se extendió a la sociedad y a la política. La inmensa inflación arrancó una buena tajada de los ingresos reales. Los trabajadores vieron disminuir sus salarios cada mes, luego cada semana. La inflación también erosionó severamente los ahorros de la clase media. Los programas de austeridad adoptados por el gobierno para aflojar la tensión económica dieron como resultado el desempleo de los trabajadores jóvenes y marginales. Hasta los ricos se sintieron angustiados por el crecimiento de la inflación y el empobrecimiento del país. En breve, ningún grupo social permaneció inmune a los efectos de la crisis.

La crisis de México ha generado un amplio debate sobre los defectos de la economía mexicana. Los estudiosos han trasegado en los registros de la postguerra para buscar los síntomas de una debilidad estructural que habría de revelarse en los años ochenta.<sup>9</sup> Y, lo que es más importante aún, durante los últimos ocho años, dos gobiernos mexicanos sucesivos han sostenido de modo insistente que ellos conocen tanto las causas como los remedios para las calamidades de México. Ahora se sostiene que el crecimiento económico de la postguerra dependió excesivamente de una economía cerrada, de un aparato estatal extremadamente grande y de un sistema de precios zigzagueante. Cada uno de estos elementos contribuyó, según esto, para generar las ineficiencias que —se sostiene— son responsables de las enfermedades de México como país. Así, se supone que el remedio se encuentra en la reducción del aparato estatal, en una apertura de la economía y en un regreso a los precios del mercado verdadero, ya no distorsionados por la intervención estatal.

Lo que se ha perdido de vista en el debate, sin embargo, ha sido a la gente pobre y trabajadora de México. Como se reconoce que los programas de austeridad y corrección de la economía necesariamente conllevan sacrificios, se ha asumido que tales sacrificios son necesarios, inevitables y viables. En este ensayo, sostengo que la industrialización de la postguerra no fue un fracaso total, aunque ha favorecido de manera desproporcionada al capital sobre la fuerza de trabajo. La intervención del Estado en la economía llenó los huecos donde el capital privado tenía miedo de entrar. El Estado también contribuyó a la estabilidad política mediante programas implícitos para la creación de empleos. No obstante, cincuenta años de fuerte crecimiento económico sirvieron más bien para aumentar

<sup>8</sup> James W. Wilkie, *Statistical Abstract of Latin America*, vol. 27, Los Ángeles, pp. 738 y 742.

<sup>9</sup> Para hallar un ejemplo de esta literatura, el lector puede comenzar con: Robert E. Looney, *Economic Policymaking in Mexico, Factors Underlying the 1982 Crisis*, Durham, 1985; Miguel D. Ramírez, *Mexico's Economic Crisis, It's Origins and Consequences*, Nueva York, 1989; José Valenzuela Feijóo, *El capitalismo mexicano en los años ochenta*, México, 1986.

las ganancias de los empresarios, que para dar mejores salarios a los trabajadores o tierras a los campesinos.

Aun así, cuando la crisis golpeó duramente al país durante la década de los ochenta, el gobierno reforzó la austeridad en forma desproporcionada, haciendo que la cargaran sobre los hombros los menos favorecidos por el crecimiento económico: los pobres, la clase trabajadora y el campesinado. Este ensayo muestra algunos de los costos sociales que han sido impuestos sobre estos mexicanos. Aunque el gobierno actual alega que sus programas han tenido éxito, tal éxito debe ser balanceado con la acción contraria de la tragedia social del México de los años ochenta.

Hay todavía otro punto que debe ser señalado aquí. El propósito de la austeridad no ha sido únicamente el de apretar los recursos financieros para pagar la deuda, ni el de contener la inflación para que no se convierta en hiperinflación. El gobierno mexicano ha utilizado deliberadamente la austeridad para cambiar el papel del gobierno en la economía, y para alterar las relaciones económicas de México con otros países. Es por ello, indudablemente, que no causa ninguna sorpresa ver saltar a México dentro de la corriente de la privatización y la liberalización. Durante el primer período de la postguerra, sin embargo, el Estado mexicano intervino en la economía para ayudar a remediar algunos de los peores aspectos de la desigual distribución del ingreso generada por el crecimiento económico de la postguerra. Pero la actual reestructuración del gobierno y de la economía parece haber olvidado esa lección. Mientras que los programadores de políticas arguyen que su programa conducirá a la mayoría de los mexicanos hacia una vida mejor, los hechos actuales muestran que durante los últimos diez años ha habido una declinación sostenida en los empleos, ingresos y estándares de vida. De manera que aún queda por ver cómo el Estado nuevamente reestructurado habrá de arreglárselas con los viejos problemas.

Las consecuencias políticas de la austeridad y de la reestructuración son enormes, tanto en México como en los Estados Unidos de Norteamérica. En México, el éxito económico y el fracaso social de la austeridad han conducido al partido gobernante a enfrentarse contra retos políticos sin precedente. Para Estados Unidos, los años de la crisis en México han sido testigos de un incremento de la migración ilegal al país, pues millones de mexicanos (y de centroamericanos y caribeños) han huido de la crisis económica, de la austeridad y de la reorganización social. El modo como ambos gobiernos configuren su respuesta habrá de determinar a muy largo plazo las relaciones mexicano-estadunidenses a lo largo de la década de los noventa. El viejo Estado mexicano se expandió para incrementar la estabilidad política. ¿Podrá contraerse el nuevo sin arriesgar su propia existencia?

## DE LA PROSPERIDAD A LA CRISIS

Hubo un período en la historia reciente de México durante el cual, el alto crecimiento, la baja inflación y una tasa de cambio estable fueron más bien la regla que la excepción. De 1940 a 1970, el crecimiento real del PIB tuvo un promedio de 6.4% anual.<sup>10</sup> De 1956 a 1970, el promedio de incremento en los precios aumentó alrededor de un 3.1% anual.<sup>11</sup> El alto crecimiento y la baja inflación mantuvieron estable el circulante; de 1954 a 1976, el peso mexicano se mantuvo estable en relación con el dólar en una proporción de 12.5:1.

Durante los años dorados del “milagro mexicano”, la economía no sólo creció, sino que se modernizó. La industria reemplazó a la agricultura y a la minería como la fuerza directriz de la economía. Importantes firmas multinacionales como Ford, General Motors, IBM, Volkswagen y Nissan establecieron en el país fábricas grandes y eficientes que produjeron una línea de productos duraderos para el consumo y otros bienes que eran originalmente importados. Se arraigó un sistema financiero moderno, que contribuyó al proceso de desarrollo. Por otra parte, en 1970 México ya se había convertido en una sociedad urbana. En 1930, dos tercios de la población vivían en la provincia; para 1970, cerca del mismo porcentaje vivía en áreas urbanas.

Sin embargo, a pesar de la modernización persistían problemas significativos. Mientras que la industria florecía, la agricultura se estancaba. Para 1973, México se había convertido en un importador neto de alimentos básicos.<sup>12</sup> Además, conforme la riqueza aumentaba, la distribución del ingreso empeoraba.<sup>13</sup> Aunque la pobreza absoluta disminuyó, los pobres recibieron una parte cada vez más pequeña del ingreso total.

Parte del problema se debió a que el crecimiento económico no había modernizado el mercado de trabajo en el nivel que los analistas pensaron que lo haría. Durante las décadas de los cincuenta y los sesenta, México continuó padeciendo un gran déficit de cargos laborales permanentes, bien adiestrados y relativamente bien pagados en relación con el número de personas capaces de ocupar tales puestos. Una de las consecuencias de esto es que la mayoría de los devengadores de salarios fueron pagados por debajo del mínimo legal. El intensivo crecimiento industrial capitalista no pudo crear suficientes empleos para los campesinos que abandonaban el campo progresivamente empobrecido.

No se trata de culpar al crecimiento industrial por no haber creado fuentes de empleo, porque sí lo hizo. Lo que pasa es que no pudo crear suficientes fuentes de empleo. Entre 1940 y 1970, la industria y el empleo industrial crecieron

<sup>10</sup> Calculado según el INEGI, *Estadísticas históricas de México*, México, 1985, p. 314.

<sup>11</sup> Jeffrey L. Bortz, *Salarios industriales en la ciudad de México, 1939-1975*, Nueva York, 1987, pp. 321-322.

<sup>12</sup> Miguel D. Ramírez, *Mexico's Economic Crisis, It's Origins and Consequences*, Nueva York, 1989, p. 77.

<sup>13</sup> Wouter van Ginneken, *Socio-economic Groups and Income Distribution in Mexico*, Nueva York, 1980, pp. 17-18.

aceleradamente. El Censo Industrial de 1940 enlistó 13 510 establecimientos industriales que empleaban a 389 965 personas.<sup>14</sup> Treinta años después, el Censo Industrial de 1970 enlistó 119 963 establecimientos industriales que le daban empleo a 1 581 247 personas; hubo un incremento de ocho tantos en los establecimientos y un incremento de tres tantos en el empleo industrial.<sup>15</sup> Para 1970, la industria contribuía con un 34% del PIB, mientras que el aporte de la agricultura cayó a menos del 12%.<sup>16</sup>

Por lo tanto, el problema no fue el crecimiento industrial, sino más bien la relación de éste con el cambio social y demográfico. De 1940 a 1970, la población mexicana creció a más del doble, pasando de poco menos de veinte a más de cuarenta y ocho millones. La Población Económicamente Activa (PEA) creció de 5.9 a casi trece millones. Mientras tanto, la población urbana del país saltó de un 35% del total en 1940 a casi el 60% en 1970.<sup>17</sup> Aunque el empleo industrial creció, el rezago de la población empleada aumentó en la misma proporción que la PEA; por lo tanto, el empleo no aumentó en cantidades suficientes como para hacer cambiar sus aspectos críticos en México. Menos de dos millones de personas trabajaban en la industria, mientras que muchos millones más se afanaban en ocupaciones de baja productividad y de bajos salarios en la agricultura y los servicios. En 1970, el empleo en el sector primario todavía sumaba a más del 40% de la fuerza de trabajo;<sup>18</sup> y la inmensa mayoría trabajaba en la agricultura tradicional, que aportaba únicamente un 7.1% del PIB total. Con el 40% de la fuerza de trabajo y sólo el 7% de la producción, no resulta nada sorprendente que los trabajadores agrícolas, tanto los asalariados como los pequeños propietarios, conformaran el segmento más pobre de la sociedad mexicana. Muchos vivían en condiciones de extrema pobreza.<sup>19</sup> Antes de la Revolución, la mayoría de los mexicanos trabajaba en la agricultura, era pobre y tenía problemas con la distribución de la tierra. Para 1970, muchos mexicanos esperaban que la modernización, la industrialización y un régimen ostensiblemente comprometido con la justicia social efectuara un cambio en sus vidas. Para muchos, así fue. A muchísimos otros, sin embargo, el crecimiento de la postguerra y el cambio no parecieron tomarlos en cuenta.

Un síntoma del problema eran los bajos salarios. Entre 1940 y 1970, la productividad laboral en la industria se incrementó en un 200%, pero el promedio real de los salarios en la industria sólo creció en un 16%.<sup>20</sup> Para 1970, la mayor parte de los trabajadores recibía un salario por debajo, cerca de, o apenas por

<sup>14</sup> Dirección General de Estadística, *Tercer Censo Industrial de los Estados Unidos Mexicanos 1940. Resumen General*, México, 1952, p. 7.

<sup>15</sup> Dirección General de Estadística, *IX Censo Industrial 1971, Resumen General*, tomo I, México, 1972, p. 35.

<sup>16</sup> INEGI, *Estadísticas Históricas de México*, tomo I, México, 1985, pp. 314-335.

<sup>17</sup> INEGI, *Estadísticas Históricas de México*, t. I, México, 1985, pp. 33, 163-165, 254-257.

<sup>18</sup> INEGI, *Estadísticas Históricas de México*, t. I, México, 1985, p. 251.

<sup>19</sup> Jesús Reyes Heróles, *Política macroeconómica y bienestar social en México*, México, 1983, p. 42-43.

<sup>20</sup> Jeffrey Bortz, *El salario en México*, México, 1986, c. 6.

enciña del salario mínimo legal en México. Ese año: “el 58% de los devengadores de salarios que no pertenecieran a la agricultura recibían alrededor del 123% del salario mínimo”, mientras que la mayoría de los trabajadores agrícolas obtenía considerablemente menos.<sup>21</sup> Aproximadamente el 45% de la fuerza de trabajo total recibía un ingreso anual inferior al salario mínimo.<sup>22</sup>

Durante el período de la postguerra, el gobierno mexicano consideró el desarrollo económico y el empleo como dos de sus más importantes prioridades. Desde el momento en que la industria privada no fue capaz de desarrollar una infraestructura económica, el gobierno patrocinó a un buen número de establecimientos industriales para la refinación del petróleo, la petroquímica, la generación de energía eléctrica, la producción de fertilizantes y otras áreas clave. Es más, como las instituciones financieras y comerciales del sector privado eran frecuentemente muy pequeñas como para servir a un país en proceso de modernización, otra vez el gobierno se vio forzado a participar activamente en estos sectores. Como resultado, el gobierno federal se convirtió en la más grande fuente de empleos del país. Con respecto al empleo, el gobierno mismo absorbió a las compañías ineficientes para evitar que los trabajadores fueran lanzados a la calle. El empleo dentro del sector público tendió de esta manera a expandirse más allá de las necesidades reales de las empresas que eran propiedad del Estado, como también lo hizo el empleo directo en la burocracia. Mientras tanto, el gobierno continuó patrocinando proyectos de inversiones en el sector privado por sus efectos proyectados de empleo. Combinada con altos niveles de protección, la industrialización mexicana creó y subsidió empresas ineficientes.

La estructura de la política mexicana hizo también del empleo una cuestión crítica. El partido en el poder, Partido Revolucionario Institucional (PRI), fue modificado en 1946 para convertirse en el representante corporativo de tres grupos sociales: el popular (clase media), los campesinos y los trabajadores. Aunque la mayor parte de los líderes del partido provenían del sector popular, el sector obrero era el que proveía la verdadera columna vertebral del partido.

La industrialización de la postguerra había explotado al campo favoreciendo los precios industriales sobre los agrícolas. Conforme la agricultura caía lentamente en la inopia y los campesinos se volvían más y más pobres, el régimen comenzó lentamente a quedar cada vez más aislado de su base campesina. La clase media urbana, mientras tanto, recibía grandes beneficios de la industrialización y la urbanización de la postguerra. Muchos, sin embargo, se volvieron cada vez más impacientes con lo que algunos percibían como un régimen autoritario, corrupto y anacrónico. La rebelión estudiantil de 1968, que tuvo como resultado cientos de muertos y miles de heridos, simbolizó la creciente separación entre el partido en el poder y la clase media urbana.

<sup>21</sup> Norma Samaniego de Villarreal y Ricardo Samaniego Breach, *Evaluación del impacto de los salarios mínimos en la economía mexicana*, documento no publicado de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, p. 10.

<sup>22</sup> Carlos Tello, *La política económica en México 1970-1976*, México, 1983, p. 20.

El trabajo industrial, de todas maneras, al hallarse controlado por la Confederación de Trabajadores de México (CTM), corporación de carácter oficial, y por Fidel Velázquez, su líder de muchos años, permaneció siendo leal al régimen. Los trabajadores industriales habían sido beneficiados por avanzadas leyes del trabajo, crecientes márgenes de ganancia y por la protección del empleo. Además, los salarios reales crecieron en forma estable desde 1952 hasta 1970. Como una recompensa a su lealtad política, los líderes del trabajo recibieron posiciones de autoridad dentro del partido y dentro del gobierno. Por eso continuamente los líderes del trabajo se volvieron corruptos gracias a las recompensas a su lealtad, y se fueron separando de manera creciente de las masas. Esto los condujo a considerar como algo muy importante conservar el empleo en las industrias clave; ésta era su forma de mantener el control sobre el movimiento laboral. Al gobierno se le persuadía fácilmente para que los apoyara.

#### LOS INICIOS DE LA CRISIS, 1970-1982

Al principio de los años setenta se volvió cada vez más difícil para el régimen sostener políticas que estimularan el crecimiento y las ganancias de los empresarios, y al mismo tiempo, promover el incremento del empleo y mejores salarios para los trabajadores. Cuando asumió el poder en 1970, el presidente Luis Echeverría Álvarez observó que la prosperidad de México dependería ahora en gran medida de la adquisición de una nueva deuda externa, y en cambio había hecho necesaria una disminución en los ahorros públicos y privados. Una de las consecuencias fue que la inflación amenazó la tasa de cambio peso-dólar, piedra miliar de la estabilidad política mexicana.<sup>23</sup> El presidente respondió adoptando una política económica restrictiva y tratando de incrementar los impuestos. Esta última medida fue abandonada cuando los intereses mercantiles se opusieron vigorosamente a ella, y la primera medida condujo a un mayor desempleo y a la oposición política en el terreno laboral.<sup>24</sup> Por tanto, su programa no alcanzó los resultados esperados.

Incapaz de aumentar los impuestos y no queriendo arriesgarse a una recesión que probablemente aumentaría el desempleo y le costaría al gobierno un apoyo político crucial, Echeverría aumentó el gasto. Lo financió con la adquisición de una nueva deuda externa y mediante la inflación, que tenía como fin incrementar las rentas del gobierno. Las finanzas del sector público, en tanto proporción del PIB, casi se triplicaron entre 1970 y 1975, pasando de 3.4% a 9.6%, mientras que el déficit de las cuentas corrientes casi se duplicó, pasando de 2.8% a 4.6%.<sup>25</sup> De forma inevitable, la inflación mostró su horrible rostro. En tanto que el régimen

<sup>23</sup> Carlos Tello, *op. cit.*, p. 48.

<sup>24</sup> Carlos Tello, *op. cit.*, p. 51.

<sup>25</sup> México, Banco de México, *Informe anual 1976*, México, 1977, p. 21.

se negó a ajustar la tasa de cambio para compensar la diferencia en relación con los niveles de precios entre los Estados Unidos y México, un peso sobrevaluado desanimó las exportaciones, favoreció las importaciones y generó la salida de capitales.

Lo que en 1970 había sido una amenaza de recesión, en 1976 se convirtió en una crisis financiera masiva. El país se encontró enfrentando la bancarrota. Echeverría se vio obligado a devaluar el peso antes de abandonar el poder. México tuvo entonces pocas oportunidades para elegir en el programa de ajustes que fue aprobado por el Fondo Monetario Internacional (FMI).<sup>26</sup> De ahí que José López Portillo asumiera la presidencia bajo el grave peso de una crisis económica y un programa de austeridad que debía restaurar el equilibrio financiero, aunque fuera al costo de la recesión, el desempleo y una posible pérdida de apoyo político. Los mexicanos ya se habían acostumbrado a considerar como normal una tasa anual de crecimiento del 6%, pero en 1976 y 1977 el PIB sólo aumentó 4.2% y 3.4%, respectivamente.<sup>27</sup>

Vista en retrospectiva, la detención de la economía mexicana al principio de los años setenta representó el principio de un largo período de lento crecimiento para el país, período que aún no ha terminado. Este deslizamiento del crecimiento elevado (1940-1970) al crecimiento lento (1970-1990) se dio, en parte, como consecuencia de un proceso externo a México. Comparada con la economía estadounidense, la economía mexicana es muy pequeña, significativamente más dependiente del capital extranjero, la tecnología extranjera y las ganancias por exportación. Durante los años setenta, la tasa de crecimiento de los Estados Unidos y otras economías industriales avanzadas declinó a casi la mitad, comparada con la de los sesenta. Esto indudablemente afectó a las exportaciones mexicanas, pues la tasa de crecimiento de la demanda disminuía y los precios por unidad se debilitaban. Además, el crecimiento de la productividad anual en México cayó de más del 5% en los sesenta a poco menos del 1% en los años setenta.<sup>28</sup> Otros factores aunados a éstos —poca investigación y desarrollo, una pequeña industria de bienes de capital, una planta manufacturera ineficiente— tampoco permitieron una rápida sustitución de exportaciones, que pasara de las tradicionales mercancías primarias a los bienes manufacturados; todo ello impidió una rápida sustitución de importaciones en bienes de capital, que hubiera aliviado los problemas del sector externo sin constreñir el crecimiento. Así, Echeverría y López Portillo fueron presionados a luchar contra factores que estaban fuera de su control. Hoy, como entonces, la moda es culpar a la corrupción y a la megalomanía presidenciales por la crisis de México. Pero los datos sugieren que los cambios estructurales, tanto en las economías del mundo como en la de México, crearon un ambiente desfavorable para los sucesivos presidentes mexicanos. Los errores políticos podrían o no haber resuelto las calamidades económicas de México, pero no las causaron.

<sup>26</sup> México, Banco de México, *Informe anual 1976*, México, 1977, p. 25.

<sup>27</sup> México, INEGI, *Sistema de cuentas nacionales de México*, México, 1983, p. 3.

<sup>28</sup> Nacional Financiera, *La economía mexicana en cifras 1981*, México, 1981, p. 42.

Desde 1970, a pesar de los esfuerzos de los políticos, Estados Unidos no ha recuperado las tasas de alto crecimiento del período inicial de la postguerra; tampoco las ha recuperado México.

Si López Portillo hubiera elegido políticas de crecimiento lento después de 1977, se hubiera arriesgado al estancamiento, al desempleo, a la caída de los salarios y a las ganancias escasas. Durante su primer año de gobierno, el empleo industrial cayó en 1%, mientras que los salarios reales en la manufactura declinaron en un 14.4%.<sup>29</sup> Desde el momento en que el ahorro interno fue demasiado bajo para financiar una vuelta al crecimiento rápido, y a partir de que la inversión extranjera directa pareció insuficiente, el presidente sintió que no tenía otra alternativa que la de volver a poner en acción un recurso que había funcionado (por un tiempo) al final de los sesenta y al principio de los años setenta: pedir prestado al extranjero. Esta vez, sin embargo, podría saldar la deuda sin recurrir al impuesto oculto de la inflación, pues podía recurrir a las recién descubiertas nuevas reservas petroleras de México. Le confió entonces al director del monopolio estatal del petróleo (PEMEX), Jorge Díaz Serrano, la tarea de llevar a cabo una rápida expansión de la industria mexicana del petróleo. PEMEX podía pedir prestados de los acreedores extranjeros los dólares necesarios para el crecimiento rápido, utilizando las reservas de petróleo como cuenta colateral. La meta explícita de esta estrategia era buscar una solución permanente al problema histórico del empleo en México. “La elaboración del presupuesto de 1980, al final de 1979, marcó el punto crítico de la política económica. En esa ocasión, el gobierno eligió explícitamente, aunque con algunas opiniones divergentes, la estrategia de alcanzar un crecimiento económico acelerado con la meta de incrementar el empleo al máximo, aunque el costo fuese una mayor inflación...”<sup>30</sup>

Las exportaciones de petróleo mexicano saltaron de poco más de mil millones de dólares en 1977, cuando López Portillo llegó al poder, hasta más de dieciséis mil millones en 1982, cuando dejó la presidencia. El petróleo empezó representando el 23% de las exportaciones totales de México al principio de su sexenio, y terminó por alcanzar el 77%, al final. En 1982, PEMEX empleaba a más de 150 000 trabajadores.<sup>31</sup> Para financiar tan impresionante crecimiento, la deuda externa del sector público del país, que había pasado de cuatro mil millones de dólares en 1970 hasta casi 20 mil millones en 1976, virtualmente se triplicó, para llegar a los 59 000 millones en 1982.<sup>32</sup> Bombeando nuevo capital en la forma de una nueva deuda externa y con las ganancias del petróleo, se espoleó el crecimiento. De 1978 a 1981, el PIB creció en un promedio de más del 8% anual.<sup>33</sup>

<sup>29</sup> Jeffrey Bortz y Rafael Sánchez, “Salarios y crisis económica en México”, en Jeffrey Bortz, *La estructura de salarios en México*, México, 1985, p. 90; y Banco de México, *Informe anual 1977*, México, 1978, p. 59.

<sup>30</sup> México, Presidencia de la República, *Las razones y las obras*, tomo I, México, 1984, p. 15.

<sup>31</sup> Francisco Colmenares César, “PEMEX: crisis y restructuración”, UNAM, disertación doctoral, 1989, pp. 289-295.

<sup>32</sup> Nacional Financiera, *La economía mexicana en cifras 1986*, México, 1986, p. 271.

<sup>33</sup> Los críticos señalaron que el régimen malgastó millones de dólares en múltiples actos de corrupción. A no ser la fuga de capitales, sin embargo, no pudieron demostrar que la corrupción, que es

Sus últimos dos años de gobierno fueron muy difíciles para López Portillo. En julio de 1981, el precio internacional del petróleo cayó en un 10%. En tanto que las exportaciones de petróleo constituían cerca del 75% del total de los ingresos de México por exportación, esto representó una disminución de cerca de dos mil millones de dólares en el ingreso esperado. Díaz Serrano, siguiendo las tendencias del mercado, anunció un significativo recorte en el precio del petróleo de PEMEX. La espiral de rumores hacía creer que había actuado sin autorización presidencial, lo cual pareció ser confirmado cuando López Portillo lo quitó de PEMEX para nombrarlo su embajador en la URSS. Estos acontecimientos presentaron la imagen de un gobierno sin plan ni dirección. Finalmente, los precios del petróleo de PEMEX fueron forzados a bajar de cualquier manera hasta igualar las tendencias en otros países productores de petróleo.

La caída de los ingresos por exportaciones, combinada con la decisión de conservar un tipo de cambio sobrevaluado, alimentaron las especulaciones acerca de una inminente devaluación, que a su vez favoreció la fuga de capitales. En octubre, uno de los más grandes grupos financieros privados del país, Alfa, se encontró imposibilitado para pagar su propia deuda externa de más de dos mil millones de dólares, y el gobierno federal vino al rescate con un gran préstamo. Al final del año, el déficit en las cuentas corrientes, que había sido financiado para el sector comercial público con la petición de préstamos del extranjero, alcanzó la suma de doce mil millones de dólares, casi el 5% del PIB. La deuda externa del gobierno alcanzó los quince mil millones de dólares durante ese año, y la deuda del sector privado, más de cuatro mil millones. Para sostener el peso, el régimen contrató en 1981 más deuda externa de la que había adquirido entre 1975 y 1980.<sup>34</sup>

Conforme se incrementaban los rumores de una devaluación, López Portillo simplemente la negaba. "Pelearé como un perro para mantener un peso estable...", dijo.<sup>35</sup> El director del Banco de México reforzó esta declaración a principios de 1982, cuando sostuvo que una devaluación era impensable. En cosa de semanas, sin embargo, el director renunció, el Banco abandonó el mercado cambiario y el peso cayó de 27 a 47 por dólar. Mientras tanto, el gobierno anunció una reducción en el presupuesto del 3%, y la congelación de los precios de cinco mil artículos básicos.

Todo esto ocurrió un poco demasiado tarde. Del verano de 1981 al verano de 1982 salieron del país cerca de quince mil millones de dólares: aproximadamente la misma cantidad que México esperaba ganar de sus ventas petroleras en 1982.<sup>36</sup> En agosto, López Portillo anunció incrementos de precio a los artículos de consumo básico para reducir los niveles del subsidio otorgado por el gobierno. El Banco de México abandonó una vez más el mercado cambiario, dejando que el

una forma de redistribución del ingreso, fuera la causante de la crisis. Véase, por ejemplo, Armando Ayala Anguiano, *JLP: Secretos de un sexenio*, México, 1984, pp. 104-105.

<sup>34</sup> Banco de México, *Informe anual 1981*, México, 1982, p. 30.

<sup>35</sup> Armando Ayala Anguiano, *JLP: Secretos de un sexenio*, México, 1984, p. 106.

<sup>36</sup> Presidencia de la República, *Las razones y las obras*, tomo I, México, 1984, p. 17.

peso flotara para encontrar su verdadero valor. Y éste rápidamente cayó a 150 por dólar. A fines de agosto, México se encuentra virtualmente en bancarrota. Jesús Silva Herzog, secretario de Hacienda, con voluntad férrea voló a Nueva York para obtener una prórroga de 90 días para el siguiente pago de la deuda de México: cerca de 10 000 millones de dólares en deuda a corto plazo. Cuando los bancos acordaron aliviar las presiones sobre México, el peso se estabilizó en cerca de 100 por dólar, lo que de todas maneras significó una importante recompensa para quienes habían convertido a principios de año sus pesos en dólares.

Para septiembre, dos bancos privados, Comermex y el Banco del Atlántico, se encontraban técnicamente en bancarrota. Ni siquiera el gobierno federal contaba con dinero suficiente para hacer los pagos acordados sobre la deuda externa del sector público. López Portillo se vio forzado a enviar representantes para suplicar, ante los bancos comerciales privados del extranjero, que le permitieran a México suspender los pagos de la deuda principal, y continuar pagando únicamente los servicios de los intereses de la deuda. Estos enviados también iniciaron discusiones con el Fondo Monetario Internacional acerca de un paquete de rescate.<sup>37</sup> El primero de septiembre, López Portillo lloró al admitir que el país se encontraba virtualmente en bancarrota, que el sistema bancario sería nacionalizado y que otra devaluación masiva ya estaba en proceso. En noviembre, su secretario de Hacienda firmaba un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, en el que prometía contraer el déficit del sector público de un 16.5% del PIB a un 8.5% en el plazo de un año; incrementar los precios del sector público; incrementar el ahorro de los sectores público y privado, y disminuir los niveles de protección.<sup>38</sup> Un mes después, Miguel de la Madrid asumía la presidencia.

Desde la devaluación de último minuto efectuada por Echeverría, el pueblo mexicano se hallaba pasmado y angustiado. Ahora se refería a la mansión de López Portillo como la Colina del Perro, en honor a su declaración. Bien sabía que una devaluación masiva no significaba sino mayor inflación, duras disminuciones en los sueldos y salarios, erosión en los ahorros y un futuro económico incierto. Los pobres contemplaron que, irremediamente, los precios de los principales productos básicos se elevaban hasta alcanzar alturas que no parecían tener ningún límite visible. La clase trabajadora sufrió un serio deterioro de sus sueldos. La clase media vio colapsarse sus humildes ahorros en pesos. Y todavía más ominoso, los ricos se angustiaron ante la nacionalización del sistema bancario. Pues consideraban que esa nacionalización significaba socialismo. Sostenían que el capital privado estaba siendo inculpaado y castigado por la corrupción y los errores de un gobierno nepotista. Todavía antes de que el recién electo Miguel de la Madrid entrara a la presidencia, los rumores acerca de un golpe de Estado iban de un lado a otro en la ciudad de México.<sup>39</sup>

<sup>37</sup> Banco de México, *Informe anual 1982*, México, 1983, p. 40.

<sup>38</sup> Presidencia de la República, *Las razones y las obras*, T. I, México, 1984.

<sup>39</sup> Yo vivía en la ciudad de México en ese tiempo y claramente recuerdo este rejuego de los rumores acerca de un "golpe de Estado", que también estuvo presente cuando el presidente Luis Echeverría anunció su famosa devaluación.

## LA CRISIS DE 1982 A 1987

Los militares no se rebelaron, ni contra López Portillo ni contra su sucesor electo, Miguel de la Madrid Hurtado. Las autoridades civiles mantuvieron el control. El nuevo régimen inició y sostuvo un firme programa anticrisis. Cuando tomó la presidencia, De la Madrid tenía dos tareas inmediatas: negociar un acuerdo con los acreedores de México, y evitar que la alta inflación existente se convirtiera en hiperinflación. Encaminado a esta meta, rápidamente anunció el Programa Inmediato de Reordenación Económica (PIRE), cuyas metas establecidas eran combatir la inflación, proteger el empleo y recuperar las tasas de crecimiento sostenido. Los métodos, sin embargo, eran los de un programa típico de austeridad impuesto por el FMI: reducción planificada de los gastos del sector público, incremento en los precios del sector público y disminución de los subsidios federales.<sup>40</sup>

El programa particular de austeridad de México también incluía estrategias sobre la deuda pública y privada, políticas de salarios y de ingresos, una reestructuración planificada de las finanzas del gobierno y hasta un nuevo diseño para la economía mexicana. La estrategia con respecto a la deuda consistía en una negociación paciente con las agencias de préstamo comerciales y multilaterales, con la mira puesta en una disminución de la deuda. Un componente importante consistía en una disminución, por parte del gobierno, de la deuda externa del sector privado; el programa FICORCA, que finalmente salvó a cientos de empresas.

La política sobre salarios e ingresos se convirtió en un instrumento importante para la lucha contra la inflación. El gobierno federal controla directamente sólo dos salarios: el mínimo legal y los salarios pagados a la burocracia federal. En ambos casos, año tras año, los incrementos en los salarios nominales fueron sostenidos por debajo de la tasa de inflación para que la presión salarial no se convirtiera en un estímulo a los incrementos generalizados de precios. Además, el gobierno presionó tanto a los negociantes como a los trabajadores para que evitaran que los salarios contractuales se incrementaran por encima del salario mínimo. En efecto, el gobierno persiguió una estrategia de reducción de los salarios reales.

Pero no era suficiente con reducir la demanda controlando los incrementos del salario nominal. Un gran componente de la estrategia de austeridad fue la reducción del gasto del sector público y, finalmente, una reducción planificada del propio sector público. El régimen comenzó reduciendo los subsidios federales a mercancías de consumo popular tales como la carne, la salud y el transporte. También trató de desprenderse de muchas empresas de propiedad estatal que no dejaban ganancias.

La reestructuración económica significó privatización y liberalización. Mediante la privatización, el gobierno mexicano esperaba reducir las ineficiencias: transferir firmas del supuestamente ineficiente sector público al supuestamente eficiente

<sup>40</sup> Presidencia de la República, *Las razones y las obras*, tomo I, México, 1984, p. 27.

sector privado. Por medio del comercio y de la liberalización, las autoridades esperaban presionar al sector privado para que se volviera todavía más eficiente, pues tendría que competir contra productores extranjeros que trabajaban a bajo costo.

Al principio, y en algunas áreas, el programa de De la Madrid pareció funcionar. México no dejó de pagar su deuda externa. Y aunque la inflación no se redujo hasta los niveles anteriores a la crisis, tampoco estalló hasta alcanzar los de Argentina y Brasil. Contra una fuerte oposición, De la Madrid incluyó a México dentro del Acuerdo General de Comercio y Tarifas (GATT),<sup>41</sup> allanando así el camino para una apertura de la economía mexicana. Además, a pesar de la nacionalización de la banca —que los ricos del país consideraron como una violación del pacto social— la estructura social de México no se derrumbó.

Sin embargo, De la Madrid combatía contra dificultades desiguales. Como no pudo negociar de modo unilateral la deuda externa, las restricciones económicas sobre el régimen fueron fuertes. El crecimiento continuo de la deuda de México, que aumentó significativamente de 1982 a 1988, tuvo dos impactos inmediatos. Los pagos de la deuda representaban transferencias de capital mexicano hacia el exterior, que socavaban los ahorros mexicanos, lo que aunado a la dependencia del país de la importación de bienes de capital, hacía decrecer el potencial de crecimiento. También, desde el momento en que el gobierno tenía que utilizar recursos internos para pagar la deuda, y en tanto que se negaba o era incapaz de hacerlo mediante una política fiscal, se vio forzado a recurrir al único impuesto viable que tenía a la mano: el impuesto de la inflación.

La inflación es un fenómeno complejo, pero la hiperinflación es más que un fenómeno económico; también es un fenómeno social y político. La inflación ocurre continuamente cuando para un régimen débil es imposible negarse a satisfacer las demandas presentadas por todos los sectores sociales. Dándole entrada a todos los reclamos, el gobierno termina imprimiendo dinero que no se encuentra apoyado en la producción económica y cede de esta manera a la inflación. La crisis de los años setenta debilitó tanto al gobierno que el régimen era incapaz de emparejar su actuación fiscal con las demandas del presupuesto. Como resultado, De la Madrid controló, pero no pudo vencer, a la inflación.

Con la deuda externa, las salidas de capital neto y la inflación continua, el programa económico de De la Madrid coincidió con una de las peores crisis económicas de la historia de México. En 1982 y 1983, el PIB total real declinó en 0.6% y 4.2% respectivamente. En 1986 cayó otro 4%. Hubo un crecimiento moderado en 1984, 1985 y en 1986, que sobrepasaba apenas el crecimiento de la población. Entre 1981 y 1987, el PIB real per cápita cayó en un sorprendente 14.1%.<sup>42</sup> Mientras tanto, la inflación permaneció fuera de control. Los precios se elevaron 98.8% en 1982. En 1983, el país pareció estar controlando ligeramente el problema, pues

<sup>41</sup> En inglés: General Agreement on Trade and Tariffs (N. del T.).

<sup>42</sup> Nacional Financiera, *La economía mexicana en cifras 1988*, México, 1988, p. 87.

el incremento de los precios cayó a 80.8%, y luego a 59.2% en 1984. Pero la tendencia fue rápidamente revertida: 63.7% en 1985, 105.7% en 1986, y un 159.8% sin precedentes en 1987.<sup>43</sup>

El colapso de la economía y la política económica de De la Madrid se combinaron para provocar un impacto social devastador sobre la población. Incluso el régimen actual ha aceptado este punto. El subsecretario de Hacienda, Guillermo Ortiz, declaró que el programa de estabilización de De la Madrid produjo un estancamiento económico, virtualmente no hubo crecimiento alguno en el empleo, mientras que la fuerza de trabajo se incrementaba un 4% al año, hubo disminuciones sustanciales en el PIB per cápita y una seria caída en los salarios reales.<sup>44</sup>

De la Madrid trató de argumentar que la prioridad del régimen era defender a los pobres y a la clase trabajadora. De hecho, sostuvo que la disminución de los salarios era necesaria para conservar los empleos. El empleo fue una meta política constantemente. "El gobierno propuso evitar incrementos en el nivel de desempleo mediante la creación directa de empleos en aquellas zonas y actividades más afectadas por la crisis..."<sup>45</sup> Vistos en retrospectiva, sus esfuerzos fueron en vano. Cada año un millón de nuevos mexicanos ingresó al mercado de trabajo. Mientras tanto, entre 1981 y 1987 el número de gente empleada en la manufactura declinó en un 17%.<sup>46</sup>

El desempleo abierto, sin embargo, no se incrementó en proporción directa a la disminución de empleos en la manufactura. En un país pobre como México, no tener un trabajo significa morir de hambre. Conforme la economía formal se contraía, en vez de permanecer sin empleo los mexicanos optaron por una de dos alternativas. Primera, millones se fueron al norte, a Estados Unidos. La migración ilegal a ese país se incrementó durante los años setenta, mientras que la inflación aumentaba y los salarios reales disminuían. Entonces, entre 1982 y 1983, el Servicio de Inmigración y Naturalización (SIN) de Estados Unidos informó de un salto del 32% en "extranjeros deportables" de México. Entre 1983 y 1987, el SIN capturó a 6 421 138 mexicanos que habían entrado ilegalmente en Estados Unidos; tal vez el doble de ese número entró sin ser detectado.<sup>47</sup>

Segunda, también millones ingresaron al sector informal de trabajo. En los últimos ocho años, las ciudades mexicanas han presenciado un dramático incremento de los vendedores ambulantes y otros que a duras penas tratan de ganarse la vida a partir de actividades artesanales y de servicios mal remunerados. Desafortunadamente, los ingresos del sector informal, son por lo común muy bajos, de manera que muchos mexicanos que intentaron ganarse la vida por ese camino casi siempre terminaron obteniendo ingresos muy pobres.

<sup>43</sup> Presidencia de la República, *Las razones y las obras*, tomo VI, México, 1988, p. 899.

<sup>44</sup> Guillermo Ortiz, subsecretario de Hacienda, plática dada en el Instituto de Estudios Latinoamericanos, Universidad de Texas, Austin, 22 de febrero de 1990.

<sup>45</sup> Presidencia de la República, *Las razones y las obras*, tomo II, México, 1985, p. 18.

<sup>46</sup> Presidencia de la República, *Las razones y las obras*, tomo VI, México, 1988, p. 899.

<sup>47</sup> Estados Unidos, Immigration and Naturalization Service, *Statistical Yearbooks*, 1982, p. 165; 1983, p. 183; 1984, p. 189; 1985, p. 177; 1986, cuadro 60; 1987, cuadro 30.

El régimen estaba preocupado con el crecimiento de la pobreza y comprometido con la protección de los más pobres entre los pobres de México. El problema era que los mecanismos tradicionales mediante los cuales el gobierno federal ayudaba a los pobres eran principalmente subsidios a los productos de consumo básico, tales como tortillas, frijoles, pan, boletos del metro y de los autobuses urbanos, etcétera. Y en cuanto las autoridades sintieron que una de las causas de la inflación era el gran déficit del sector público, la reducción de ese déficit se convirtió en una de sus metas primarias. Sin embargo, para reducirlo había que eliminar los subsidios al consumidor. A lo largo de los años ochenta, el gobierno hizo precisamente eso. Como resultado, de 1981 a 1988, el consumo per cápita de granos básicos disminuyó: arroz, de 7.3 kg a 3.0 kg; frijoles, de 25.5 kg a 14.2 kg; maíz, de 245.2 kg a 142.4 kg.; y trigo, 60.5 kg a 49.3 kg. En otras palabras, la eliminación de subsidios a los granos básicos provocó una caída de un tercio a la mitad en el consumo. Para finales de los años ochenta, el 40% de la población de México estaba por debajo de los estándares para el mínimo nutricional.<sup>48</sup>

Parte del dramático incremento de la pobreza después de 1982 se debió a la pronunciada disminución de los salarios reales. Durante la segunda mitad del "milagro mexicano", la gente se había acostumbrado a tener precios estables, altos salarios y un estándar de vida en aumento. De 1952 a 1976, el promedio de los salarios reales en la industria aumentó a más del doble.<sup>49</sup> Desafortunadamente, la crisis financiera de 1976 le marcó un alto al progreso de los trabajadores mexicanos. Una de las metas del programa de austeridad puesto en marcha por López Portillo, era asegurar una disminución en los salarios reales. De hecho, una de las ironías del *boom* petrolero de fines de los años setenta fue que al alto crecimiento no lo acompañó un aumento en los salarios, sino más bien lo contrario. Entre 1976 y 1982, los salarios reales cayeron en un 13%.<sup>50</sup> El crecimiento de finales de los años setenta significó recuperación para el capital, pero no para la fuerza de trabajo.

La austeridad salarial aumentó durante el gobierno de De la Madrid. En 1983, los salarios reales en la manufactura cayeron en un inesperado 23.2%. En 1984, cayeron otro 6.2%. Después de un pequeño incremento del 1% en 1985, cayeron pesadamente en un 8.8% en 1986.<sup>51</sup> Así, los programas de austeridad de López Portillo y De la Madrid condujeron a una disminución del 40% en los salarios industriales reales entre 1976 y 1987.

La caída del empleo, el incremento de la pobreza y la rápida disminución de los salarios reales no sirvieron de mucho; más bien causaron un profundo impacto en la sociedad mexicana. Uno de sus efectos fue un preocupante incremento de la criminalidad urbana, particularmente en la ciudad de México. Aunque las estadísticas de criminalidad son notoriamente inaccesibles en México, el gobierno local anunció que hubo un aumento del 30% en los crímenes reportados en el

<sup>48</sup> Demetrio Sodi de la Tijera, *La Jornada*, 29 de enero de 1990, p. 10.

<sup>49</sup> Jeffrey L. Bortz, *Industrial Wages in Mexico City, 1939-1975*, Nueva York, 1987, cap. 5.

<sup>50</sup> Jeffrey L. Bortz, *El salario en México*, México, 1986, p. 194.

<sup>51</sup> INEGI, *Boletín bimestral de información económica*, México, enero-marzo de 1988, p. 101.

Distrito Federal entre 1983 y 1988.<sup>52</sup> De hecho, los delitos comunes aumentaron probablemente a más del doble. Aunque hay que tomar en cuenta que la mayoría de los habitantes de la ciudad de México no confían en la policía, y que por tanto, la mayoría de los crímenes nunca son reportados a las autoridades. Por tanto, no debe quedar ni la más mínima duda de que la crisis económica ha estado asociada con la descomposición social.

Junto con el incremento del crimen vino la desilusión. Para 1987, muchos mexicanos habían experimentado personalmente durante una década el empeoramiento sistemático de sus vidas materiales. Un profesor se quejaba en una carta enviada a un diario: "Me siento desesperado porque, aun si personalmente dejo de comer por un día, o renuncio a comprar ropa y zapatos para poder comprar un libro que necesito, no puedo evitar darles de comer a mis hijos..."<sup>53</sup> Una vida de pobreza, la disminución de las expectativas y hasta el exilio en Estados Unidos no eran lo que los mexicanos querían o esperaban de su sociedad.

#### EL PROGRAMA DE ESTABILIZACIÓN DE SALINAS, 1987-1990

En 1987, De la Madrid nombró a Carlos Salinas de Gortari, quien había sido secretario de Programación y Presupuesto y el arquitecto principal del programa económico 1982-1988, como candidato del PRI a la presidencia. A su vez, Salinas había elevado a Pedro Aspe Armella, su subsecretario de Programación y Presupuesto, a la titularidad de la Secretaría. Y por otra designación de Salinas, Ernesto Zedillo Ponce de León reemplazó a Aspe como subsecretario. Durante el último año del régimen de De la Madrid, el triunvirato Salinas-Aspe-Zedillo fue muy influyente y decisivo para diseñar una nueva estrategia económica; en efecto, un nuevo equipo económico tomó el relevo en 1987. Cuando Salinas llegó a la presidencia, nombró a Aspe secretario de Hacienda, y a Zedillo secretario de Programación y Presupuesto. Este equipo ha dirigido la economía mexicana durante los últimos tres años.<sup>54</sup>

Aunque muchos piensan que el trío Salinas-Aspe-Zedillo representa una extensión del trío De la Madrid-Salinas-Aspe, la actual administración no piensa así. Argumenta que De la Madrid no fue lo suficientemente enérgico; en sus términos, fue más bien palabras y no acción.<sup>55</sup> Considera que el actual programa de estabilización arrancó realmente cuando Salinas fue nombrado candidato a finales de 1987, y que este programa ha sido efectivo porque el actual presidente es

<sup>52</sup> Banamex, *México social 1988-1989*, México, 1989, p. 372.

<sup>53</sup> Citado en Adolfo Gilly, *México, la larga travestía*, México, 1985, p. 11.

<sup>54</sup> Presidencia de la República, *Las razones y las obras*, tomo V, México, 1988, p. 761.

<sup>55</sup> Entrevista con Norma Samaniego, presidenta de la Comisión Nacional del Salario Mínimo, México, 10 de enero de 1989.

más enérgico que el anterior.<sup>56</sup> En todo caso, es verdad que en la política mexicana, desde el momento en que un presidente nombra a su sucesor, este último comienza a ganar poder y el primero comienza a perderlo.

A menos de un año de la elección presidencial, el candidato Salinas enfrentó una difícil tarea. El país se hallaba al borde de la hiperinflación. La liberalización y la privatización no habían alcanzado los resultados prometidos. Los estándares de vida se habían derrumbado. Había muchas señales de que el PRI no sería capaz de ganar una elección limpia. En diciembre de 1987, ocho meses antes de la elección, el régimen anunció el Pacto de Solidaridad Económica (PSE), un nuevo programa de estabilización que el grupo de Salinas había venido desarrollando a lo largo del año.

El programa de Salinas tenía tres componentes principales: perseverancia, un nuevo pacto social y la profundización de los cambios estructurales. El nuevo régimen intentaba perseverar con lo que consideraba elementos positivos del programa de austeridad de De la Madrid; además, planeaba fortalecer sus puntos decisivos. También se proponía reconstruir el pacto social que había sido roto con la nacionalización de López Portillo.<sup>57</sup> El nuevo pacto social significaba obtener nuevos acuerdos explícitos con los representantes del trabajo, los negocios y los campesinos sobre puntos clave: la tasa de cambio, los salarios y los bienes y servicios públicos y privados. Mientras tanto, se intentaba alcanzar más amplios cambios estructurales en la economía a través de la liberalización del comercio, y la desregulación y la redefinición del rol del sector público.

El Pacto funcionó en efecto desde diciembre de 1987 hasta diciembre de 1988, cuando el presidente Salinas tomó el cargo. Entonces lo reemplazó con el Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento Económico (PECE). El PECE ha sido esencialmente la continuación del PSE; ambos integran el programa de estabilización de Salinas. En el momento en que este ensayo se escribía, el PECE había sido ampliado para seguir en funcionamiento hasta julio de 1990.

Uno no puede presentar una valoración justa de los dos pactos sucesivos sin tomar en cuenta su intento por reorientar la economía mexicana. Los métodos seguidos han sido los aplicados en todas partes: el recurso a la liberalización y privatización del comercio con el fin de volver la economía de México más abierta, más eficiente y dejarla mejor situada para tomar ventaja de un mercado mundial cambiante. De la Madrid proveyó las bases jurídicas para la apertura de la economía de México al hacerla ingresar en el GATT. Salinas utilizó las nuevas estructuras legales para iniciar una apertura violenta y severa al reducir dramáticamente las tarifas y otros impedimentos a las importaciones. Actualmente, México tiene unas tarifas promedio de menos del 9%, lo que lo vuelve una de las economías

<sup>56</sup> Guillermo Ortiz, subsecretario de Hacienda, plática en el Instituto de Estudios Latinoamericanos, Universidad de Texas, Austin, 22 de febrero de 1990.

<sup>57</sup> Entrevista con Ricardo Pascoe, vocero oficial del Partido de la Revolución Democrática, Chiapas, México, 2 de febrero de 1990. Algunos de los miembros de la oposición interpretan el "Pacto" literalmente, es decir, como un intento por reconstruir el pacto social mexicano de la postguerra, que se había venido abajo.

más abiertas del mundo.<sup>58</sup> Antes de Salinas, muchos economistas mexicanos argumentaron de forma vociferante que la industria mexicana no resistiría el impacto de barreras tan bajas. En retrospectiva, aunque algunas industrias sí han sufrido por la apertura de la economía, no parece que haya habido clausuras masivas como las que una vez se predijeron. En este sentido, la liberalización del comercio ha funcionado.

La privatización también fue un componente clave de la estrategia. El equipo económico de Salinas ha llevado a cabo serios esfuerzos para privatizar empresas del Estado tan importantes como Aeroméxico, Fundidora de Monterrey, Mexicana de Aviación e incluso Teléfonos de México. En esta área se han obtenido algunos éxitos. Sin embargo, tres empresas propiedad del Estado —PEMEX, la CFE y los FFCC— constituyen más del 90% de la participación de éste en la economía. La verdadera privatización no se puede lograr sin tener que vender estas firmas, algo que hoy en día parece políticamente imposible. Salinas ha liberalizado más de lo que ha privatizado. Por ejemplo, en una entrevista reciente con *The Wall Street Journal*, declaró que el gobierno no tiene planes de proveer de títulos individuales a las tierras comunales consideradas como “ejidos”, una demanda frecuentemente presentada por la derecha mexicana.<sup>59</sup>

Como parte de su reforma estructural, Salinas finalmente llevó a cabo los cambios fiscales siempre pospuestos, aunque siempre proclamados por los sucesivos presidentes de México, incluyendo a Echeverría, López Portillo y De la Madrid. La nueva estructura fiscal estipula una base impositiva más amplia sin elevar las tasas, dándole mayor énfasis a la recolección de impuestos y yendo tras de los notorios evasores. Durante los treinta años anteriores a 1989, sólo dos mexicanos fueron a la cárcel por evasión de impuestos. Tan sólo en 1989, el gobierno de Salinas encarceló a 50 personas por tal delito.

Cualquier reforma estructural debería estar apoyada por una estrategia coherente para tratar con la deuda externa. Salinas perseveró en la política puesta en juego por De la Madrid de llevar a cabo pacientes negociaciones con los acreedores extranjeros. En febrero de este año fue recompensado con un acuerdo que reduce las transferencias al extranjero del 6.5% del PIB anual a sólo el 2.5%, permitiendo así que permanezcan en México mayores ahorros para el crecimiento financiero.<sup>60</sup>

La parte más importante del programa, sin embargo, fue la continuación de la austeridad para el pueblo de México. El PSE y el PECE continuaron la estrategia de De la Madrid de sostener las tasas de salarios por debajo de la tasa de inflación existente y la anticipada, logrando que de esa manera los salarios reales cayeran. Por tanto, no fue ninguna sorpresa que sostuviera en su cargo al exitoso secretario del Trabajo de De la Madrid, Arsenio Farrell, dada su probada habilidad para

<sup>58</sup> Guillermo Ortiz, subsecretario de Hacienda, plática en el Instituto de Estudios Latinoamericanos, Universidad de Texas, Austin, 22 de febrero de 1990.

<sup>59</sup> *The Wall Street Journal*, 4 de abril de 1990, p. A15.

<sup>60</sup> Guillermo Ortiz, subsecretario de Hacienda, plática en el Instituto de Estudios Latinoamericanos, Universidad de Texas, Austin, 22 de febrero de 1990.

convencer al movimiento obrero oficial de que soportara el control salarial del Estado. Mientras, la Secretaría del Trabajo ha aplastado implacablemente todos los movimientos laborales disidentes que han tratado de romper la camisa de fuerza salarial.

Salinas anticipó claramente que el programa de estabilización requeriría de tiempo para restablecer el crecimiento. Mientras tanto, la pobreza continuada ha representado un serio obstáculo político. Por tanto, ha establecido el Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL) para combatir la pobreza extrema. Nombró a su hermano, Raúl Salinas de Gortari, como secretario técnico del Programa. Así, Raúl Salinas se reporta con Carlos Rojas, subsecretario de Programación y Presupuesto. Y el presidente también estableció una junta no partidaria de asesores para vigilar el funcionamiento del programa. Nombrando a Carlos Tello Macías, exdirector del Banco de México bajo el gobierno de López Portillo, como presidente de la Junta. El gobierno le dio entonces a Solidaridad un presupuesto generoso de diez mil millones de dólares, casi el 3% del proyecto total de gastos federales.<sup>61</sup>

Bajo el gobierno de los anteriores presidentes de México, los esfuerzos realizados en contra de la pobreza extrema por lo general se enfocaban en los subsidios, la mayoría de los cuales fueron eliminados por De la Madrid y por Salinas en su esfuerzo por reducir el presupuesto. Solidaridad no tiene como finalidad remplazar estos subsidios. En cambio, se encamina a incrementar las capacidades productivas de las comunidades indígenas y campesinas, para tratar de crear mayor empleo para los más pobres entre los pobres de México. Solidaridad estableció así un programa de crédito agrícola, de rehabilitación de caminos rurales, pozos y bodegas de almacenamiento, y apoya los proyectos de pequeñas agroempresas.<sup>62</sup> PRONASOL ha remplazado casi por completo los esfuerzos llevados a cabo por los gobiernos anteriores contra la pobreza. Por ejemplo, De la Madrid estableció la Comisión Nacional Alimentaria en 1983 para coordinar los esfuerzos gubernamentales dirigidos a alimentar mejor al pueblo mexicano. Bajo el gobierno de Salinas, la Comisión se haya virtualmente sin presupuesto y sin autoridad.<sup>63</sup>

El gobierno de Salinas considera el nuevo pacto social como un éxito completo. De hecho, es uno de los pocos programas latinoamericanos que han tenido éxito contra el choque económico. No sólo redujo notablemente la inflación y eliminó la amenaza de la hiperinflación, sino que, además, lo hizo sin provocar una recesión. Como anunció José Angel Gurría, subsecretario de Hacienda, "Por primera vez en muchos años, México se halla de nuevo en repunte."<sup>64</sup> Igualmente importante, el régimen argumenta que no hay ni ha habido otra alternativa a su programa.

<sup>61</sup> Carlos Rojas, *La Jornada*, 26 de enero de 1990, p. 16.

<sup>62</sup> Carlos Rojas, *La Jornada*, 26 de enero de 1990, p. 16.

<sup>63</sup> Entrevista con Marcel Morales, Comisión Nacional Alimentaria, Chiapas, México, 2 de febrero de 1990.

<sup>64</sup> José Angel Gurría, "Mexico Is on the Move Again", *The Wall Street Journal*, 9 de marzo de 1990, p. A13.

Zedillo Ponce de León declaró que la estrategia del gobierno “es la única viable bajo las actuales condiciones, con objeto de avanzar firmemente por el sendero del desarrollo”.<sup>65</sup>

#### LOS COSTOS DEL PROGRAMA DE RECUPERACIÓN

Al inicio del período de la postguerra, la economía mexicana en expansión favoreció tanto al capital como a la fuerza de trabajo, aunque como hemos visto, favoreció más al primero que a la segunda. Durante los primeros años de dificultades financieras, Echeverría y López Portillo trataron de encontrar soluciones a fin de que el patrón de crecimiento de la postguerra se sostuviera. Fracasaron, y De la Madrid se vio forzado a implantar un programa de austeridad que dañó a los pobres y a la clase trabajadora, pero no restableció el crecimiento ni las grandes ganancias para el capital. El programa de recuperación de Salinas parece haber sido exitoso en comparación con los de sus predecesores, pero los datos indican que en ello ha habido más recuperación para el capital que para la fuerza de trabajo.

Bajo el PSE y el PECE, la inflación cayó de 159% en 1987, a sólo 19.7% en 1989. Mientras tanto, el PIB creció 1.5% en 1987, 1.1% en 1988, y 3.0% en 1989.<sup>66</sup> Aunque éste es un crecimiento moderado en comparación con los años dorados del “milagro mexicano”, es elevado para un país que ha sido sometido a un pesado programa antiinflacionario. En comparación, al tiempo que la inflación mexicana cayó del 150% al 20%, Argentina y Brasil se movían hacia incrementos anuales de precios con magnitudes de cuatro dígitos.

No obstante, la victoria puede todavía manifestarse como efímera. Las tasas reales de interés continúan siendo muy altas en México, lo que se puede manifestar como un obstáculo para el crecimiento.<sup>67</sup> O lo que es más grave, la reducción de la inflación se puede haber conseguido por el método tradicional de sobrevaluar al peso. Por un tiempo, tanto Echeverría como López Portillo amortiguaron la inflación por medio del uso de una moneda corriente sobrevaluada, sólo para encontrar que esto estimulaba las importaciones, bloqueaba las exportaciones y conducía a la fuga de capitales. Al inicio del PSE, en 1987 México tenía un superávit de cuentas corrientes de 3.9 mil millones de dólares. En 1990, el país probablemente tenía un déficit de 4.3 mil millones.<sup>68</sup> El PECE contribuyó para establecer un clima donde la inversión privada y la exportación de manufacturas estimularon el crecimiento, pero la tasa de intercambio alentó a los compradores para incrementar las importaciones.

<sup>65</sup> *La Jornada*, 1 de diciembre de 1990, p. 23.

<sup>66</sup> Nacional Financiera, *El mercado de valores*, núm. 5, 1 de marzo de 1990, p. 25.

<sup>67</sup> Guillermo Ortiz, subsecretario de Hacienda, plática en el Instituto de Estudios Latinoamericanos, Universidad de Texas, Austin, 22 de febrero de 1990.

<sup>68</sup> *The Wall Street Journal*, 2 de febrero de 1990, p. A10.

Mientras tanto, el paquete de la deuda recientemente negociado puede ser menos significativo de lo que el gobierno propone. El señor Gurría informó que el arreglo significa una reducción total de la deuda de 20 000 millones de dólares, y unos ahorros anuales de 1.6 mil millones en el pago de los intereses.<sup>69</sup> Otros analistas argumentan que el acuerdo firmado el 4 de febrero en la ciudad de México "sólo reducirá ligeramente el servicio de la deuda de México y al final, puede incrementar la deuda externa de México en 93 mil millones de dólares." De hecho, desde el momento en que el acuerdo permite a los bancos acreedores evitar más préstamos a México, simplemente mueve la carga financiera de los acreedores comerciales a los organismos gubernamentales y multilaterales.<sup>70</sup>

En tanto los logros financieros del programa de estabilización han sido reales, aunque tal vez difíciles de sostener, no ha habido ningún alivio para los pobres y la clase trabajadora de México. El empleo se puede haber incrementado durante los últimos tres años, pero sólo ligeramente. Las estadísticas a corto plazo sobre la situación del empleo en México son notoriamente imposibles de conseguir, así que resulta difícil medir el impacto del Pacto de Solidaridad sobre el empleo. Dado que el crecimiento se recuperó de 1987 a 1990, y dado que la creación de empleos es dependiente del crecimiento, es muy probable que haya alguna recuperación en el empleo durante los últimos tres años. El Instituto Mexicano del Seguro Social informó de un incremento estable de sus afiliados de 1986 a 1988.<sup>71</sup> El presidente de la Comisión Nacional del Salario Mínimo ha presentado evidencia convincente de que otras mediciones estadísticas también muestran una recuperación en el cuadro de empleo durante 1989.<sup>72</sup>

Desafortunadamente, la moderada recuperación del empleo alcanzada de 1987 a 1990 no ha sido suficiente para contrarrestar ni el déficit de empleos heredado de los primeros años de la postguerra, ni la acentuación del desempleo y del subempleo a lo largo de los años ochenta. Las estimaciones actuales indican que el 12% de la fuerza de trabajo mexicana está desempleada, y el 40% está subempleada.<sup>73</sup> Mientras tanto, las medidas de austeridad tomadas por el gobierno continúan dejando a los trabajadores sin sus empleos. Por ejemplo, entre octubre de 1989 y febrero de 1990, 10 000 trabajadores de la empresa de propiedad pública Diconsa perdieron sus empleos.<sup>74</sup> Carlos Tello estima que inclusive en el escenario más optimista de una tasa de crecimiento del 4%, la economía mexi-

<sup>69</sup> Jose Angel Gurría, "Mexico Is on the Move Again", *The Wall Street Journal*, 9 de marzo de 1990, p. A13.

<sup>70</sup> *The Wall Street Journal*, 2 de febrero de 1990, p. A10.

<sup>71</sup> Nacional Financiera, *El mercado de valores*, núm. 4, 15 de enero de 1990, p. 8.

<sup>72</sup> Entrevista con Norma Samaniego, presidenta de la Comisión Nacional del Salario Mínimo, ciudad de México, 10 de enero de 1989.

<sup>73</sup> Demetrio Sodi de la Tijera, *La Jornada*, 29 de enero de 1990, p. 10.

<sup>74</sup> *La Jornada*, 5 de febrero de 1990, p. 14.

cana no creará empleos suficientes para aquellos que los necesitan. Sostiene que México se está moviendo hacia una "economía de no empleo".<sup>75</sup>

El mismo presidente Salinas ha expresado su preocupación acerca de esta cuestión:

Si con la apertura de la economía los mexicanos encuentran que hay más oportunidades de trabajo, que la economía está creciendo, que la inflación se mantiene baja, entonces, sí, estoy seguro de que seguirán apoyando la apertura de la economía. Si, por el otro lado, abrimos la economía y no obtenemos reciprocidad en otros mercados —y por tanto nuestra economía no es capaz de exportar y no es capaz de crecer a tasas suficientemente altas— entonces estoy seguro de que la opinión pública será adversa, y el público dirá: 'Regresemos al pasado...'<sup>76</sup>

Como sus predecesores, él está perfectamente consciente de los fuertes lazos que unen el empleo con el apoyo político. Sinceramente cree que su estrategia es la mejor apuesta para crear ese empleo, pero, a la fecha, todavía no ha obtenido resultados concretos.

Así, muchos economistas ven un crecimiento continuo del empleo marginal en los servicios urbanos y en las actividades artesanales.<sup>77</sup> Durante 1989, los datos oficiales muestran una pequeña disminución en el desempleo abierto en las áreas urbanas de México, acompañada por un incremento significativo de los "trabajadores autoempleados", que en México es una categoría que incluye a muchos de los trabajadores marginales del país.<sup>78</sup>

Mientras tanto, los ingresos salariales han seguido sufriendo durante los últimos tres años, a pesar del ligero giro positivo que se ha dado en el crecimiento y el empleo. Los datos al respecto, sin embargo, son contradictorios. Los salarios industriales reales cayeron 1.5% en 1987 y 0.4% en 1988.<sup>79</sup> En 1989, sin embargo, el gobierno sostiene que la masa total de salarios se incrementó por vez primera en varios años. También insiste en que el promedio de tasas salariales se elevó durante el último año.<sup>80</sup> No obstante, entre el tercer trimestre de 1988 y el tercer trimestre de 1989, el salario mínimo real cayó 4.5%. Para finales del año pasado, el salario mínimo real en México había declinado más del 50% con respecto a 1978.<sup>81</sup>

Sensible a la pérdida de apoyo político sobre este asunto, el régimen dio bonificaciones especiales a los trabajadores oficiales de alto nivel. Del 1 de diciembre de 1988 al 30 de noviembre de 1989, los salarios nominales entre los burócratas federales se incrementaron en un 10%. Aunque una tasa inflacionaria relativamente

<sup>75</sup> Entrevista con Carlos Tello Macías, presidente de la Junta de Asesores del PRONASOL, ciudad de México, 31 de enero de 1990.

<sup>76</sup> *The Wall Street Journal*, 4 de marzo de 1990, p. A15.

<sup>77</sup> Entrevista con Francisco Colmenares, Secretaría de la Contraloría General, ciudad de México, 8 de enero de 1990.

<sup>78</sup> Nacional Financiera, *El mercado de valores*, núm. 5, 1 de marzo de 1990, p. 19.

<sup>79</sup> INEGI, *Boletín Trimestral de Información Económica*, México, abril-junio de 1989, p. 95.

<sup>80</sup> Entrevista con Norma Samaniego, presidenta de la Comisión Nacional del Salario Mínimo, ciudad de México, 10 de enero de 1989.

<sup>81</sup> Nacional Financiera, *El mercado de valores*, núm. 4, 15 de enero de 1990, pp. 8, 31.

baja del 20%, dobló el incremento salarial nominal, erosionando severamente los ingresos reales. Para mantener el apoyo político, Salinas ordenó un aguinaldo especial, una bonificación navideña única, para los trabajadores oficiales de alto nivel en el gobierno, negándose a generalizar este pago entre los niveles bajos.<sup>82</sup> Para la mayor parte de la gente, por tanto, los últimos tres años han significado disminuciones sostenidas en sus ingresos. Mientras que los pobres han sido más afectados por la eliminación de subsidios, quienes perciben salarios en la clase trabajadora y la clase media han sido golpeados por la declinación de sus ingresos reales.<sup>83</sup>

¿Se puede aumentar los salarios durante los años noventa? Si la estrategia de Salinas conduce a un crecimiento sostenido en la producción y la productividad, entonces hay una posibilidad de que la demanda de más trabajadores, especialmente más trabajadores especializados, pueda conducir hacia un incremento de los ingresos salariales. De todas maneras, Salinas siente que uno de los grandes retos para el país consiste en incrementar el nivel de los ahorros nacionales.<sup>84</sup> Y es difícil imaginar que un programa macroeconómico diseñado para promover ahorros pueda también estimular incrementos salariales.

Más todavía, México ha fundado su recuperación en la posibilidad de volverse más competitivo ante los productores extranjeros. El presidente Salinas subrayó la importancia de conservar los impuestos corporativos de México a niveles competitivos con los de Estados Unidos.<sup>85</sup> Y todavía más importantes, sin embargo, son los costos salariales. De enero de 1980 a diciembre de 1989, el salario mínimo en México cayó en relación con el dólar, de 7.15 por día a 3.75 por día. Los empleadores mexicanos necesitaban 261 000 dólares para pagar a 100 trabajadores por un año en 1980; y sólo necesitaron 137 000 en 1989.<sup>86</sup> Esto ha alentado el crecimiento de la industria maquiladora en México, uno de los pocos puntos brillantes en el horizonte del país. Hoy, en tanto México busca un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, los inversionistas en este país están interesados en primer lugar en "tener mayor acceso al amplio mercado mexicano de fuerza de trabajo barata y cada vez con un más alto grado de especialización".<sup>87</sup> Este énfasis en salarios competitivos y fuerza de trabajo barata podría conducir a una creciente prosperidad a largo plazo, pero para parafrasear a John Maynard Keynes, a largo plazo, la mayor parte de los actuales trabajadores de México estarán muertos.

A corto plazo, aunque el empleo pueda incrementarse un poco, es dudoso que se pueda incrementar lo suficiente como para proveer de empleos suficientes y

<sup>82</sup> Entrevista con Francisco Colmenares, Secretaría de la Contraloría General, ciudad de México, 8 de enero de 1990.

<sup>83</sup> Entrevista con Sergio de la Peña, Facultad de Economía, Universidad Nacional Autónoma de México, ciudad de México, 12 de enero de 1990.

<sup>84</sup> Guillermo Ortiz, subsecretario de Hacienda, plática en el Instituto de Estudios Latinoamericanos, Universidad de Texas, Austin, 22 de febrero de 1990.

<sup>85</sup> *The Wall Street Journal*, 4 de enero de 1990, p. A15.

<sup>86</sup> Miguel Covián Pérez, "La década perdida", *La Jornada*, 21 de enero de 1990, p. 19.

<sup>87</sup> *The Wall Street Journal*, 27 de marzo de 1990, p. A3.

con ingresos lo debidamente elevados para sacar a los mexicanos de la pobreza. El déficit de empleos y los bajos salarios sostenidos no son señales positivas para el pueblo de México. En un país donde el 40% de la población sufre de niveles nutricionales por debajo de la media, y en donde el analfabetismo funcional todavía es aproximadamente del 40%, hay muy poco dentro del mercado laboral que pueda ofrecer esperanzas.<sup>88</sup> El mismo presidente de la Junta de Asesores del PRONASOL, Carlos Tello, sostiene que la reducción generalizada en los subsidios llevada a cabo por De la Madrid, causó un incremento en la pobreza, y que es muy poco probable que Salinas vaya a restituir esos subsidios.<sup>89</sup> De acuerdo con su opinión, la economía mexicana históricamente ha favorecido una distribución no igualitaria del ingreso. Con 20 millones de mexicanos viviendo en la extrema pobreza, PRONASOL simplemente es una gota en el balde que no puede eliminar de ninguna manera la pobreza, ni borrar el déficit de empleos.<sup>90</sup>

#### EL RETO POLÍTICO

De 1976 a la fecha, los mexicanos han confrontado una situación económica cada vez peor. De 1982 a 1987, la elevada inflación y la recesión crearon una pobreza mayor, salarios más pequeños y un decremento en las oportunidades de empleo. De 1982 a la fecha, los programas de austeridad del gobierno han tenido éxito; para evitar que la inflación se convierta en hiperinflación, han abierto la economía y han privatizado cientos de empresas. También han contribuido a incrementar el sufrimiento, la desnutrición y la desilusión personal. Por lo tanto, no hay ninguna sorpresa en el hecho de que el partido en el gobierno esté enfrentando retos electorales sin precedente, primero bajo la presidencia de De la Madrid, luego bajo la de Salinas. En 1983, la oposición conservadora, el Partido Acción Nacional (PAN), ganó virtualmente toda elección municipal importante en el estado norteño clave de Chihuahua.<sup>91</sup> Mientras que en las 52 elecciones municipales de Oaxaca el partido en el poder ganó exactamente el 100% de los votos, algo que los cínicos atribuyeron al fraude tradicional. Para ellos, esto confirmó que en elecciones justas, como en Chihuahua, la oposición ganaría; en "elecciones normales" el fraude del gobierno produciría la necesaria victoria del PRI.<sup>92</sup> En 1985, el PRI ganó diestramente las siete elecciones de gobernadores, aunque la oposición y los observadores extranjeros denunciaban que había hecho trampa.

<sup>88</sup> Demetrio Sodi de la Tijera, *La Jornada*, 29 de enero de 1990, p. 10.

<sup>89</sup> Entrevista con Carlos Tello Macías, presidente de la Junta de Asesores del PRONASOL, ciudad de México, 31 de enero 1990.

<sup>90</sup> Entrevista con Carlos Tello Macías, presidente de la Junta de Asesores del PRONASOL, ciudad de México, 1 de marzo de 1990.

<sup>91</sup> Juan Molinar, "Los procesos electorales: 1983-1987", en Germán Pérez y Samuel León, *17 años de un sexenio*, México, 1987, p. 190.

<sup>92</sup> *Ibid.*, p. 192.

Cuando el presidente Miguel de la Madrid Hurtado eligió a su secretario de Planeación y Presupuesto, y principal arquitecto de su programa económico para ser el candidato del PRI a la presidencia, sólo se podía esperar que el camino electoral estuviera empedrado con dificultades.<sup>93</sup> Después de seis años de crisis y doce años de disminución en los ingresos, Carlos Salinas de Gortari enfrentó retos significativos por parte del candidato conservador, Manuel J. Clouthier del PAN, y del candidato de la izquierda, Cuauhtémoc Cárdenas, hijo del antiguo presidente Lázaro Cárdenas y representante de un nuevo movimiento político.

Cuatro días antes de la elección, dos de los más próximos colaboradores de Cárdenas fueron asesinados por asaltantes desconocidos. El 6 de julio de 1988, millones de mexicanos fueron a las urnas. El 13 de julio el gobierno anunció que Salinas había ganado el 50.36% de los votos, Cárdenas el 31.12% y Clouthier el 17.07%, con el resto distribuido entre los candidatos menores.<sup>94</sup> La oposición reclamó que el 24% de las boletas había sido alterado por el gobierno. En los distritos donde no hubo fraude, la oposición informó que Cárdenas había recibido el 42%, el PRI el 36% y el PAN el 22%. Reclamaba que el fraude perpetrado en un cuarto de los distritos electorales cambió la victoria de manos de Cárdenas a las de Salinas.<sup>95</sup> Apuntaba que la izquierda tuvo una amplia victoria en la urbana ciudad de México, donde el fraude es difícil de cometerse, pero que la abrumadora victoria de Salinas se dio en las áreas rurales donde sí era fácil llevar adelante los fraudes. *Los Angeles Times* patrocinó después una encuesta, según la cual, sólo el 24% de los mexicanos piensan que efectivamente Salinas ganó las elecciones de 1988.<sup>96</sup>

¿Se puede dirigir México hacia una democracia estable? Con pocas dudas, Salinas está apostando a que su programa económico proveerá empleos y oportunidades suficientes a fin de convencer al pueblo de México para que lo apoye. También está convencido de que México no tiene otra alternativa que su programa económico. Desafortunadamente, la austeridad, la liberalización y la privatización han creado sólo promesas y no resultados para millones de trabajadores, campesinos y gente pobre. Salinas tiene la razón; si su programa no funciona, los mexicanos demandarán un regreso al antiguo sistema con que el Estado trató de remediar algunas de las peores injusticias del mercado. Sin embargo, sin otra cosa más que un débil PRONASOL, Salinas ha estado implantando un aparato estatal cada vez más pequeño y que ha sido despojado de su habilidad para ayudar a los pobres y a la clase trabajadora de México. Si las políticas actuales tienen los resultados esperados, esto no importará. Mientras tanto, Salinas puede encontrar innecesario abrir el sistema político para que su programa pueda tener tiempo suficiente de funcionar. Pero si las políticas actuales no tienen resultado, el sistema

<sup>93</sup> Peter H. Smith, "The 1988 Presidential Succession in Historical Perspective", en Wayne A. Cornelius, Judith Gentleman y Peter H. Smith, *Mexico's Alternative Political Futures*, San Diego, 1989.

<sup>94</sup> Presidencia de la República, *Las elecciones de 1988*, México, 1988, p. 174.

<sup>95</sup> José Berberán, Cuauhtémoc Cárdenas, Adriana López Monjardín y Jorge Zavala, *Radiografía del fraude*, México, 1988, p. 151.

<sup>96</sup> *Interamerican Public Opinion Report*, Los Angeles, enero de 1990, p. 3.

político cerrado y el aparato estatal empequeñecido no serán capaces de contener la angustia que muchos mexicanos ahora sienten.

*Traducción: Salvador Mendiola*